

Realidad

Estimado director:

La reciente entrevista a Johannes Kaiser en Tolerancia Cero ha provocado incomodidad en algunos sectores, pero también ha puesto sobre la mesa un debate imprescindible: el tamaño del Estado, la migración irregular y la urgencia de restablecer la confianza en nuestras instituciones.

Reducir en cientos de miles el número de empleados públicos no es una ocurrencia arbitraria ni una cruzada ideológica. Es una reacción legítima ante una administración hipertrofiada, poco fiscalizada y, en muchos casos, capturada por redes de favores. La denuncia de la Contraloría sobre licencias fraudulentas (más de 25.000 casos en el aparato estatal) no es una anécdota: es un síntoma de una enfermedad profunda. Pretender que se solucione con talleres de ética administrativa o con campañas comunicacionales es simplemente cínico.

En materia migratoria, la idea de cerrar el grifo antes de secar el piso no solo es sensata: es indispensable. El ingreso masivo e irregular de personas sin identidad verificada, muchas de ellas con prontuario, ha desbordado los servicios públicos, tensionado la convivencia barrial y facilitado la expansión del crimen organizado. Expulsar a quienes entraron ilegalmente (de manera gradual, legal y con coope-

ración internacional) no es xenofobia, es proteger la soberanía, el orden público y la dignidad de los migrantes regulares que sí cumplen las reglas.

Quienes se alarman con estas propuestas suelen ser los mismos que celebraron el crecimiento sin control del Estado, el clientelismo y la laxitud migratoria como si fueran virtudes progresistas. Hoy, los costos de esa irresponsabilidad los pagan los ciudadanos comunes: con inseguridad, con listas de espera y con una creciente sensación de que el esfuerzo individual es despreciado.

Lo que Kaiser planteó, más allá de los matices, es algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta: el Estado no puede seguir creciendo a costa de quienes trabajan y pagan impuestos; y Chile no puede convertirse en un refugio sin fronteras donde el crimen se disfraza de derecho humano.

Es hora de dejar de temerle a la verdad. La corrección política no paga sueldos, no detiene delincuentes, ni devuelve la confianza institucional. Gobernar exige coraje. Y eso, justamente, es lo que ha faltado durante años.

Rodrigo Salinas Rojas
psicólogo clínico